

## SESIONES ORDINARIAS

2004

## ORDEN DEL DIA N° 432

COMISIONES DE ENERGIA  
Y COMBUSTIBLES Y DE DEFENSA  
DEL CONSUMIDOR

Impreso el día 1° de junio de 2004

Término del artículo 113: 10 de junio de 2004

SUMARIO: **Suministro** de gas en la República Argentina. Adopción de medidas para garantizar el mismo. **Mínguez y Damiani**. (1.401-D.-2004.)

*María del Carmen C. Rico. – Irma Roy.  
– Diego H. Sartori. – Ricardo A. Wilder.*

**Proyecto de declaración***La Cámara de Diputados de la Nación*

DECLARA:

Exhortar al Poder Ejecutivo, a través de los órganos que correspondan, tome los recaudos necesarios a los efectos de garantizar el normal suministro de gas en la República Argentina, a fin de propender a la reactivación y continuidad de las iniciativas de inversión, que de otro modo se verían sumamente afectadas.

*Juan J. Mínguez. – Hernán N. L. Damiani.*

## INFORME

*Honorable Cámara:*

Las comisiones de Energía y Combustibles y de Defensa del Consumidor, al considerar el proyecto de declaración de los señores diputados Mínguez y Damiani, creen innecesario abundar en más detalles que los expuestos en los fundamentos que lo acompañan, por lo que los hacen suyos y así lo expresan.

*Jesús A. Blanco.*

## FUNDAMENTOS

Señor presidente:

La ley 25.561 ha declarado la emergencia pública en materia social, económica, administrativa, financiera y cambiaria, reconociendo y regulando jurídicamente diversas situaciones que se presentaban en nuestro país.

**Dictamen de las comisiones***Honorable Cámara:*

Las comisiones de Energía y Combustibles y de Defensa del Consumidor han considerado el proyecto de declaración de los señores diputados Mínguez y Damiani, por el que se solicita al Poder Ejecutivo, a través de los organismos que correspondan, se garantice el normal suministro de gas en la República Argentina; y, por las razones expuestas en el informe que se acompaña y las que dará el miembro informante, aconsejan su aprobación.

Sala de las comisiones, 19 de mayo de 2004.

*Jesús A. Blanco. – Stella M. Córdoba. – Víctor M. F. Fayad. – Alicia Narducci. – María S. Leonelli. – Juan C. Gioja. – Marcela A. Bianchi Silvestre. – María F. Ríos. – Héctor T. Polino. – Eduardo A. Arnold. – Rosana A. Bertone. – Juan C. Bonacorsi. – Irene M. Bösch de Sartori. – Lilia E. M. Cassese. – Víctor H. Cisterna. – José C. G. Cusinato. – María G. De la Rosa. – Gustavo D. Di Benedetto. – Dante Elizondo. – Daniel M. Esaín. – Gustavo E. Ferri. – Alejandro O. Filomeno. – Roddy E. Ingram. – Juan M. Irrazábal. – Luis J. Jalil. – Carlos A. Larreguy. – Juan C. López. – Encarnación Lozano. – Alfredo A. Martínez. – Heriberto E. Mediza. – Blanca I. Osuna. – Adrián Pérez. –*

La ley de emergencia vino a instaurar un nuevo orden en el sistema cambiario nacional, hecho, éste, que obviamente repercute en la economía toda, produciendo efectos no tan sólo con relación a usuarios y consumidores, sino también sobre aquellas empresas concesionarias de servicios, las cuales puntualizan que ante la derogación de la ley de convertibilidad se hace necesaria una actualización de las tarifas vigentes en las contrataciones que mantienen con el Estado.

En uso de atribuciones conferidas por el artículo 76 de la Constitución Nacional, esta ley de emergencia delega de manera excepcional en el Poder Ejecutivo facultades propias del Poder Legislativo, hasta el mes de diciembre del año 2003. La aludida delegación encuentra sustento entre otros tópicos en reglar la reestructuración de las obligaciones, en curso de ejecución, afectadas por el nuevo régimen cambiario de pesificación.

Por su parte, el artículo 9º del mismo cuerpo legal autoriza al Poder Ejecutivo nacional a renegociar los contratos comprendidos en la norma comentada precedentemente, para estatuir seguidamente que, en el caso de los contratos que tengan por objeto la prestación de servicios públicos, deberán tomarse en consideración los siguientes criterios: 1) El impacto de las tarifas en la competitividad de la economía y en la distribución de los ingresos; 2) la calidad de los servicios y los planes de inversión,

cuando ellos estuviesen previstos contractualmente; 3) el interés de los usuarios y la accesibilidad de los servicios; 4) la seguridad de los sistemas comprendidos; y 5) la rentabilidad de las empresas.

Merece recordarse que el artículo 10, siempre dentro del mismo plexo legal, prescribe que las disposiciones previstas en los artículos 8º y 9º de la ley en ningún caso autorizarán a las empresas contratistas o prestadoras de servicios públicos a suspender o alterar el cumplimiento de sus obligaciones.

El ministro de Economía, Roberto Lavagna, reiteró el 24 de marzo de 2004 a través de los medios masivos de comunicación su postura en favor de un aumento selectivo de las tarifas del gas para mejorar la situación de las empresas y evitar una crisis de abastecimiento, mientras que el presidente Néstor Kirchner reclamó a las compañías que inviertan y aseguró que no habrá problemas con el suministro.

Creemos oportuno destacar que los fines propuestos por la ley de emergencia económica en el tema de las tarifas de servicios públicos, que refiriéramos más arriba, deben ser tenidos en cuenta a la hora de la renegociación, garantizando desde ya la provisión de los mismos.

Por los motivos expuestos es que solicitamos la aprobación de la presente iniciativa, descontando el apoyo de los legisladores.

*Juan J. Mínguez. – Hernán N. L. Damiani.*

